BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

I LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

21 de febrero de 1980

Núm. 119-I

PROYECTO DE LEY

Por el que se complementa el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución de sentencia.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento provisional de la Cámara, se ordena la remisión a la Comisión de Justicia y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del proyecto de ley por el que se complementa el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución de sentencia.

Los señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de quince días hábiles, que expira el 10 de marzo, para presentar enmiendas al citado proyecto de ley, cuyo texto se inserta a continuación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1980.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Landelino Lavilla Alsina**.

La constante pérdida del poder adquisitivo del dinero y los profundos cambios operados en nuestra sociedad en relación con lo que puede considerarse interés nor-

mal o usual de aquél, deben tener su adecuada repercusión en materia procesal, a fin de evitar los graves perjuicios económicos que para quien ha obtenido una sentencia favorable puede suponer el retraso en su ejecución, incluso cuando este retraso haya sido consecuencia de recursos totalmente desestimados.

A esta circunstancia e indisolublemente unido a ella aparece el hecho de que los obstáculos y dificultades que el obligado a pagar pone, no tienen, en ocasiones, otro objetivo que dilatar su efectividad para conseguir el correspondiente beneficio como consecuencia del proceso normal de erosión monetaria, llegándose por esta vía a la interposición de recursos que frecuentemente podrían ser tachados de actos en fraude de ley porque no persiguen otra finalidad que el simple transcurso del tiempo para cumplir su obligación con moneda devaluada y obtener mientras llega el momento de hacerla efectiva un interés que está, como se sabe, muy por encima del que el artículo 1.108 del Código Civil fija como legal en el 4 por ciento, con arreglo a la Ley de 7 de octubre de 1939.

Imperativos de justicia y de economía procesal exigen la adopción de medidas

urgentes que eviten en lo posible la multiplicación de situaciones idénticas o análogas a las que acaban de señalarse, especialmente en materia penal, en la que frecuentemente —sobre todo en los procesos seguidos por accidentes de circulación de vehículos de motor, con sentencias que condenen al pago de elevadas cantidades en concepto de responsabilidad civil— el recurso de casación es utilizado como simple instrumento de paralización temporal de la efectividad de la condena civil.

Para conseguirlo se considera como solución más favorable entre las diversas opciones que se ofrecen desde el punto de vista técnico la de añadir dos párrafos al artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por su ubicación dentro del propio texto legislativo y por la naturaleza de éste, tiene una amplia vocación generalizadora que conviene a los propósitos de esta Ley, que ha de ser aplicada a todos los órdenes jurisdiccionales.

En todo caso es importante destacar que la reforma tiene un carácter provisional, consecuencia de exigencias sociales ineludibles, en espera de la promulgación de los nuevos textos procesales.

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, some-

te a la deliberación de las Cortes Generales el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único

En el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se agregan, después de los dos párrafos de su actual redacción, otros dos del siguiente tenor literal:

“En el supuesto de que la resolución condene al pago de una cantidad líquida, ésta devengará, desde que fue dictada hasta que sea totalmente ejecutada, en favor del acreedor, el interés básico o de redescuento fijado por el Banco de España incrementado en dos puntos, salvo que interpuesto recurso fuera revocada totalmente. En los casos de revocación parcial el Tribunal resolverá con arreglo a su prudente arbitrio.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General Presupuestaria.”

Suscripciones y venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.,

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.590 - 1961

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID